

LA CULTURA POLITICA DE UNA PROTESTA CAMPESENA CONTRA EL AJUSTE ESTRUCTURAL ECONOMICO EN GUANACASTE, COSTA RICA, 1988

*Marc Edelman**

Pese al interés creciente de los antropólogos por la penetración capitalista en las sociedades rurales y por la manera en que las culturas locales configuran o limitan las

* Norteamericano, doctorado en Antropología de la Universidad de Columbia (Nueva York), Profesor Asistente de Antropología de la Universidad de Yale.

Agradecimientos. Esta investigación fue apoyada por la American Council of Learned Societies y la Universidad de Yale. Deseo agradecer a Philippe Bourgois, Jayne Hutchcroft, Douglas Kincaid, Lynn Morgan, Jorge Rovira Mas y Robert G. Williams por sus sugerencias y críticas a este trabajo. También agradezco mucho la amistad, confianza y hospitalidad que me brindaron los agricultores de Santa Cruz y Nicoya. Ellos comparten la responsabilidad por cualquier mérito que pueda tener este ensayo; evidentemente yo soy el único responsable por sus defectos.

fuerzas globales,¹ pocos han analizado la reacción popular a los programas de ajuste estructural económico que ya están modificando las condiciones de vida de los pobres en el Tercer Mundo.² Aunque la protesta social ha sido tema de interés antropológico por mucho tiempo,³ pocos han analizado las culturas políticas subyacentes a los cada vez más numerosos conflictos sociales provocados por la austeridad, tales como las protestas y huelgas ocurridas en gran parte de América Latina.⁴ Los proponentes de perspectivas interpretativas pocas veces relacionan los procesos locales, como son entendidos por sus propios actores, con las coacciones y transformaciones político-económicas que se dan a nivel macro. Los científicos sociales⁵ que analizan la deuda en los países en desarrollo, generalmente ignoran los problemas "culturales" y buscan explicar el conflicto en términos de efectos de distribución, modificaciones de los indicadores macroeconómicos o presupuestarios o la interpretación estrecha y limitada de las posiciones sustentadas por las diversas clases sociales o grupos de interés. Algunos⁶ postulan la necesidad de examinar el tipo de régimen, así como el balance de intercambio exterior y el historial de crédito para cada país en particular. Otros⁷ reconocen que las protestas contra la austeridad reflejan una "economía moral"⁸ y que están imbuidos de "un sentido vigorizante de legitimidad y del derecho de rectificar el abuso", pero se interesan principalmente en la comparación de diferentes países respecto a la incidencia de conflictos y su relación con variables como la deuda per cápita, la inflación, la urbanización y la cuota de poder de los sectores laborales organizados.

En este ensayo se examina una "huelga" rural efectuada en 1988 para exigir mejores condiciones de producción (acceso a crédito, mayores precios para productores y la indemnización por pérdidas sufridas por la sequía) que culminó en la toma durante dos días del edificio municipal de la ciudad de Santa Cruz, Guanacaste. Se argumenta que la investigación de campo antropológica sobre protestas contra la austeridad puede contribuir en forma significativa a la comprensión de las causas y el carácter de estas movilizaciones.⁹ Esto no se plantea simplemente porque los análisis a nivel micro llenan un vacío dejado por los estudios de economistas, sociólogos y politólogos, ni tampoco, como comenta Warman¹⁰ con cierta ironía, porque "el problema que tenemos los antropólogos es el de explicar algo tan

sonoro y solemne como la lucha de clases con datos como el aumento en el precio del jabón." Más bien, la investigación de campo, que es "quizá la única base...del aporte distintivo de la antropología [sociocultural] a las ciencias humanas".¹¹ permite incorporar en el análisis a los sujetos históricos reales cuyas actividades, formas de comprensión, expectativas y motivaciones pueden ser parcial o totalmente distintas a las que se les atribuyen en los análisis a niveles de mayor abstracción. El uso de fuentes orales y las observación permite también rescatar del olvido a la memoria y expresión populares, fuentes tan ricas y de otra manera sin documentar, por lo que se pretende que las palabras y acciones de los propios actores ocupen el papel protagónico de este ensayo.

Cultura política y movimientos sociales

El elemento "moral" de la protesta contra la austeridad es particularmente inaccesible para los análisis a nivel macro, pero es un factor esencial para entender por qué algunas políticas económicas provocan protestas y violencia, mientras que medidas similares en otros contextos sólo producen resignación o una resistencia "cotidiana" y "adaptativa".¹² Aunque las fuertes y repentinas alzas en el costo de la vida son la causa inmediata de muchas protestas recientes contra la austeridad en América Latina, no siempre provocan acciones colectivas. Considerar que las reacciones disímiles a políticas de ajuste similares son el resultado de diferentes "capacidades de movilización"¹³ o de "tradiciones" específicas de "concertación social".¹⁴ es evadir el problema de cómo surgen y se reproducen estas capacidades o tradiciones. Plantear el problema de esta manera sugiere que el aspecto "moral" de la resistencia colectiva es, más bien, un problema histórico-cultural, que es mejor abordado por la investigación etnográfica de casos concretos. Sin embargo, para comprender su significación más amplia y comparativa es necesario también replantear algunos conceptos claves de las teorías antropológicas sobre los movimientos sociales, en particular el de "cultura política".

El uso explícito del concepto de "cultura política" en la literatura antropológica actual comparte con la "economía

moral" y los análisis a nivel macro un énfasis en los problemas de distribución.¹⁵ Por lo general, se enfatizan las ideas compartidas respecto a "los derechos y obligaciones en la asignación y reasignación de los bienes públicos".¹⁶ Sin embargo, en este artículo se plantea que otros aspectos no-distributivos de la cultura están claramente imbuidos de significados políticos y de potencial movilizador (o desmovilizador), tales como nociones acerca del honor, el machismo y la identidad fundamental basada en la etnicidad, procedencia regional u ocupación. Además, se argumenta a continuación que "cultura política" como categoría teórica se ha empleado a menudo, como lo hace Forman, en un sentido demasiado estrecho que no toma suficientemente en cuenta las historias individuales y colectivas de los sujetos de los procesos de cambio estudiados por los científicos sociales. Esta experiencia acumulada de luchas comunales y por la sobrevivencia familiar, de distintos tipos de participación organizativa, y hasta de vida cotidiana genera expectativas y esperanzas que frecuentemente yacen debajo de expresiones de efervescencia social con otras causas inmediatas y otro contenido manifiesto. Para entender estas raíces profundas de los movimientos sociales es preciso indagar no sólo sobre las expresiones ideológicas coherentes y aparentemente "modernas", sino sobre lo que Rudé (1980) ha denominado "las ideologías inherentes" de los grupos populares, derivadas de su experiencia directa y su memoria colectiva.

A pesar de esta crítica a las concepciones de cultura política de Forman, habría que reconocer que sus observaciones acerca del Estado constituyen un mérito poco usual en la literatura de antropología política, la cual generalmente analiza fenómenos solamente a nivel micro. Cuando él propone que la cultura política es "el contexto significativo dentro del cual se forja la ideología política y se desarrolla la actividad política", en efecto señala la importancia de tomar en cuenta el papel de las políticas estatales en la configuración de los supuestos y acciones de los diferentes grupos sociales. Como observa Skocpol,¹⁷ la conciencia política se desarrolla "en el punto de convergencia entre los Estados y las sociedades...(y) depende en una medida significativa de las estructuras y actividades de los mismos Estados que los actores sociales buscan influenciar."

Ajuste estructural y la pequeña agricultura

Si bien las definiciones de campesinado han enfatizado las demandas estatales que pesan sobre los agricultores pobres,¹⁸ entonces el campesinado costarricense—aún en la provincia marginal de Guanacaste—debe parecer un caso excepcional. No se trata de que los pobres del campo en Costa Rica no han sido sujetos a este tipo de exacciones o que los términos de intercambio entre la agricultura y la industria no hayan favorecido casi siempre a esta última; sino más bien, el carácter excepcionalmente benevolente del Estado costarricense (al menos en términos comparativos) y su aparato de beneficencia social de amplia cobertura han desempeñado un papel importante en la mitigación de las relaciones de explotación que ya existían. Los orígenes del benigno sistema de dominación costarricense es un tema muy amplio que rebasa los objetivos de este artículo.¹⁹ Después de casi cinco décadas de gobiernos reformistas (y cuatro décadas sin un verdadero ejército), las instituciones políticas costarricenses eran, por lo general, notablemente abiertas y sensibles a las necesidades de la población y sus principales indicadores sociales y de salud—alfabetismo, expectativas de vida, mortalidad infantil—se aproximaban o equiparaban a los de los países desarrollados.²⁰

La "red de seguridad" para el sector agropecuario abarcaba una modesta reforma agraria²¹ y programas extensivos de créditos subsidiados canalizados a través de la banca nacionalizada;²² asistencia técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y otras instituciones estatales; insumos a bajo costo y precios de sustentación subsidiados por el Consejo Nacional de Producción (CNP); seguros para cultivos otorgados por el Instituto Nacional de Seguros (INS); y, mediante un acuerdo con el CNP, fondos de emergencia para indemnizar pérdidas no cubiertas por el seguro de cosechas, otorgados por el Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas del INS. De hecho, no todos los productores han podido aprovechar las facilidades ofrecidas por estos programas y a menudo los numerosos requisitos burocráticos para beneficiarios implicaban costos adicionales más allá de las posibilidades de los pobres, especialmente para aquellos que no estaban acostumbrados a contratar los servicios de abogados y topógrafos, llenar formularios o esperar durante días en oficinas gubernamentales.

No obstante, esta benevolencia estatal y la limitada experiencia de opresión vivida por los costarricenses, han incidido en la creación de altas expectativas respecto a las acciones y políticas estatales, aún entre los cínicos —a menudo justificadamente— por la corrupción de ciertos políticos o por la parálisis de importantes instituciones estatales. Estas expectativas, con profundas raíces en la experiencia histórica del pueblo costarricense, son un elemento fundamental para comprender la tranquilidad rural que ha vivido el país por largos años.²³

El modelo costarricense de desarrollo social demócrata se dio en el marco de una economía caracterizada por la dependencia de unos pocos productos primarios de exportación (café, banano, carne de res y azúcar), una reducción secular en los términos de intercambio, un sector industrial altamente protegido y dependiente de las importaciones, así como un crecimiento acelerado del sector público, particularmente en la década de 1970, que generó un alto déficit fiscal y un proceso pronunciado de endeudamiento. Esta situación, en combinación con otros factores como las fuertes alzas en el precio del petróleo y los incrementos en las tasas de interés en los años 70, así como una larga tradición de mantener tipos de cambio sobrevalorados y patrones de consumo propios de un país desarrollado, inciden para que la crisis de la deuda externa se manifieste en Costa Rica antes que en otros países más grandes de Latinoamérica. En 1981, en medio de repentinas devaluaciones y un acelerado proceso inflacionario, Costa Rica se convirtió en el primer país latinoamericano en suspender el pago de sus obligaciones por la deuda.

Luego de la severa recesión que vivió el país de 1980 a 1982, se inició un proceso de recuperación lento e irregular,²⁴ producto en parte de la implementación de políticas económicas ortodoxas a través de acuerdos con organismos financieros internacionales, aunque los gobiernos costarricenses, conscientes de que dismantelar el Estado benefactor implicaría un alto costo social, no siempre han accedido ante las exigencias del FMI y el Banco Mundial. La ubicación estratégica de Costa Rica entre la Nicaragua Sandinista y el Canal de Panamá también favoreció la entrega masiva de ayuda económica de los EE.UU., lo que contribuyó a reactivar el crecimiento económico. Además, la progresiva consolidación del consenso entre los diversos sectores de la clase dominante a

favor de un proceso de desarrollo basado en la exportación de productos no tradicionales, permitió la implementación de medidas económicas claves de corte liberal, como la unificación del tipo de cambio, con un mínimo de conflicto intra-élite.

El énfasis de los organismos financieros y de asistencia internacionales en la eficiencia, la promoción de las exportaciones y las ventajas comparativas, al ser traducido a políticas nacionales, ha tenido consecuencias perjudiciales para los productores de granos, y en especial para los pequeños agricultores con acceso a crédito e insumos subsidiados, precios garantizados y asistencia técnica del gobierno.²⁵ Los acreedores internacionales no consideran a Costa Rica como un productor competitivo de granos, pese a que los precios mundiales reflejan los altos subsidios que gozan los agricultores de países desarrollados. Como resultado, en los últimos años, las políticas crediticias y de precios del gobierno se encaminan a desestimular la producción de la mayoría de granos. Desde 1986 se importa casi todo el maíz amarillo, utilizado como alimento para aves, principalmente a través del programa estadounidense PL-480.²⁶ Costa Rica, antes autosuficiente en arroz, por primera vez en diez años está importando cantidades significativas de este grano.

La cuota del crédito bancario para el sector privado canalizada a la actividad agropecuaria disminuyó de un 16 por ciento en 1985 a un 12 por ciento en 1987, mientras que el crédito destinado para préstamos a "pequeños productores", con tasas de interés más bajas, descendió vertiginosamente de un 4 por ciento a un 2 por ciento²⁷. En términos nominales, el total de recursos asignados para los pequeños productores se ha mantenido constante de 3645,6 millones en 1980 a 3381,4 millones en 1985; pero traducidas estas cifras a dólares, esto representa una disminución de US\$346,5 millones a US\$66,6 millones.²⁸ Además, los cálculos bancarios de los costos de operación no han logrado mantenerse al ritmo de avance de la inflación, obligando en efecto a que los que solicitan préstamos tengan otras fuentes adicionales de capital. Instituciones claves, como el MAG, el CNP y el IDA han sufrido serias restricciones presupuestarias²⁹, y los recursos estatales disponibles se adjudican cada vez más para la producción de exportaciones no tradicionales, denominada en términos un tanto bombásticos por el gobierno, como "agricultura de cambio". A los pequeños

agricultores se les dificulta el cultivo de estos productos—que incluyen plantas ornamentales, flores, tubérculos, macadamia, marañón y cardamomo—porque requieren de una gran capacidad económica para sobrevivir severas fluctuaciones del mercado, grandes inversiones de capital, experiencia administrativa y técnica y largos intervalos entre los períodos de siembra y cosecha.

El Contexto

Una buena cosecha de maíz, frijoles o arroz —los principales cultivos de los pequeños agricultores— requiere de una precipitación anual de 1.500 a 2.000 mm, bien distribuida a lo largo de la estación lluviosa, de mayo a noviembre. Aunque desde 1950 se registra una disminución pronunciada en la precipitación anual, sin duda vinculada a la severa deforestación de la región, siempre presenta una muy alta variabilidad anual y mensual.³⁰

Los agricultores de Santa Cruz, por lo tanto, no desconocen las sequías, las inundaciones y la pérdida de sus cultivos. Hay años en que los más pobres y desafortunados apenas logran cosechar unos "puñitos", que ni siquiera alcanza para el consumo doméstico ni para semilla para la próxima siembra. Sin embargo, la mayoría expresa la esperanza de lograr producir, por lo menos, lo necesario para cubrir "el gasto de la casa". Para lograr esta seguridad mínima, muchos pequeños productores intercambian su trabajo con vecinos, "hombro a hombro", y cultivan parcelas con sus propios recursos —o, como dicen ellos, "a pulso". Pero muchos también incurren en gastos significativos en efectivo, alquilando parcelas generalmente en unos 3.000 colones (aproximadamente US\$38,00) por hectárea cada ciclo productivo de cuatro meses), recurriendo a préstamos bancarios, contratando peones y comprando insumos costosos.

El cantón de Santa Cruz se ubica en el extremo norte de la península de Nicoya y tiene una extensión de 1.331 km² y una población de 31.133 personas en 1984, de la que un 79 por ciento es rural.³¹ Las cálidas "bajuras", repartidas en algunas grandes y muchas pequeñas propiedades, constituyen una zona de transición entre la península, donde predominan las pequeñas propiedades y las grandes haciendas al norte y al este. En las montañas bajas que se extienden desde

Santa Cruz hasta Nicoya en el sur —donde aún no penetra la red eléctrica nacional ni muchos servicios públicos y sin buenos caminos ni servicios de telecomunicaciones— predominan los pequeños propietarios, muchos de ellos productores de café.

En la época precolombina, la región que hoy se conoce como Guanacaste constituía el extremo sur del área bajo la influencia cultural mesoamericana. Administrado durante gran parte de la época colonial como un Partido separado de Costa Rica y Nicaragua o como parte de Nicaragua, la cultura y el habla guanacastecos aún muestran una gran influencia de esa nación vecina, y los guanacastecos —descendientes de los indios Chorotegas, europeos y esclavos africanos— a veces hablan de la diferencia entre su "fisonomía" y la de los habitantes del Valle Central, por lo general descendientes de europeos. Estos vínculos culturales e históricos con Mesoamérica —y más inmediatos con Nicaragua— forman parte de una identidad regional guanacasteca que se expresa para el pequeño campesino en un hondo arraigo a la cultura del maíz mucho más pronunciado que en otras regiones del país.³² Manuel Morales, un joven agricultor de La Esperanza, un pueblo de la zona alta, expresó este concepto generalizado, aunque de una manera más elocuente y apasionada que muchos:

Guanacaste es la cuna del atol, del maíz, y nosotros los guanacastecos tenemos que seguir con las tradiciones de nuestros antepasados. Son miles de años que llevamos [cultivando el maíz] y no podríamos devolvérselo jamás [si se perdiera]. El maíz es uno de los productos más vitales para la alimentación del país. La comida. El pan del pobre. Si no producimos lo que nos comemos, ¿qué diablos vamos a hacer? No vamos a comer café —sí siembro el café, lo tomo, pero no voy a comer café. Como guanacasteco no aceptaría jamás que el gobierno me ofreciera la posibilidad de sembrar otra cosa por dinero y dejar de cultivar el maíz. No sé si algún otro aceptaría, pero yo no.

El comentario de Morales acerca de la posibilidad de tener que dejar de cultivar maíz, firme y defensivo a la vez, refleja la indignación que siente ante la amenaza a su forma de vida, legitimada y ennoblecida por sus referencias a miles de años de historia. Entrevistado en su almacigal de cafetos bien cuidado y regado, era evidente que no es ningún enemigo del cambio ni un atavista opuesto a tomar riesgos y orientado a producir sólo lo necesario para sobrevivir.

Las inquietudes expresadas por Morales reflejan lo que él y muchos pequeños agricultores de Santa Cruz sentían como amenazas simultáneas a diversas expectativas históricamente condicionadas, entre ellas el deterioro dramático de las condiciones climáticas, cambios constantes de las políticas estatales y una urgencia cada vez más aguda, que desembocaron en la movilización política y un cambio en la autopercepción "conformista" de los campesinos de esta región.

Crisis de subsistencia y crisis económica

Antes de mediados de la década de los ochenta, los años de sequía —con una precipitación anual menor a 1.400 mm— casi siempre fueron seguidos por años con suficiente o mucha lluvia.³³ Pero de 1985 a 1987, tres años de muy poca lluvia produjeron una "crisis de subsistencia"³⁴ y los agricultores guanacastecos más pobres de repente afrontaban la amenaza de la inminente ruina. Para la época de siembra en mayo de 1988, muchos ya habían vendido los pocos chanchos y gallinas que les habían quedado y comido o vendido el maíz y los frijoles que había de usarse para semilla. Un ex—agricultor del pueblo Veintisiete de Abril, en las bajuras guanacastecas, sintetizó su desesperación ante esta situación:

Por el momento no estoy sembrando nada porque no tengo con qué sembrar. Como uno es pobre, yo vine perdiendo hectárea y media de maíz aquí y de arroz tres. Y vendí todo lo que tenía, el animalito, para seguir dándoles la alimentación [a los hijos]. Y de eso vivimos. El año pasado lo pasamos también brincando, lo mismo, vendiendo carambaditas.

Sin embargo, denominar estos desastres ecológicos y los consecuentes problemas sociales como una "crisis de subsistencia", puede ocultar el hecho de que aún los pequeños agricultores no sólo producen para su propio consumo, sino que también participan en complejas relaciones comerciales y financieras. Las observaciones de otro agricultor, también de Veintisiete de Abril, padre de seis hijos, el mayor de ellos de sólo catorce años de edad, reflejan esta dimensión de la crisis, así como las expectativas de consumo que tienen para "tiempos normales" y la angustia provocada por los últimos desastres:

Hace tres años, al verme yo estrecho, que no puedo ni darles de comer a los güilas, entonces yo me hice una deuda en el banco. Me dije yo, 'voy a sembrarme unas tres cajuelas de frijoles para ver si acaso consigo algo, si es bueno el invierno. Si es bueno, compro ropa a los güilas, zapatos, alguna cosa.' De las tres cajuelas de frijoles — de las dos que tenía en el terrenito mío que es un poquito, como una hectárea— de esas dos cajuelas que sembré, conseguí un cuartillo, que son ocho libras. Y de otra cajuela que tenía en un terreno alquilado conseguí un kilo. En el 86 fue malo el invierno, en el 87 también. Entonces no pude pagar y ahora no siembro absolutamente nada porque tengo cerradas las puertas, como dicen, ahí en el banco. A veces [en el pasado] me he dedicado a sembrar sandía, melón, vainicas, pipián, alguna cosa por ahí, pero hijuepucha, sin un centavo en la bolsa, ¿cómo voy a conseguir a un peón para que me ayude a regar por lo menos la sandía o que me ayude a trabajar?

La importancia para las protestas de junio 1988 de estas desgracias y de la necesidad de sembrar en el momento oportuno, se evidenció en el transcurso de la investigación de campo a través de los comentarios de los campesinos y, de manera aún más significativa, a través de las observaciones acerca de la confiabilidad de la memoria de los informantes de los diferentes grupos sociales respecto al momento en que se efectuó la ocupación de la municipalidad. Seis meses después de la toma de la "muni", acontecimiento que aún ocupaba un lugar privilegiado en la conciencia tanto de los agricultores como de los funcionarios, se observó una marcada diferencia en la capacidad de cada uno de estos dos grupos para ubicar las protestas correctamente en el calendario. Para los agricultores, la selección del momento oportuno para las protestas estaba estrechamente vinculada a un punto crítico en el ciclo anual y, aunque muchos de ellos tuvieron dificultad para referirse a otros temas en términos precisos y exactos, ubicaron la ocupación del edificio municipal —correctamente— "a finales de mayo o principios de junio," "a principios del invierno" o "en la época de siembra." Por otro lado, los burócratas sí mostraron un excelente manejo de otros tipos de información de fácil corroboración, pero, como observó despectivamente un dirigente campesino, "viven en un mundo de valijas y computadoras" y, casi sin excepción, fallaron por varios meses en su ubicación de la fecha de estas protestas.

Esta disparidad de memoria se originaba no sólo en su relación con la naturaleza y el ciclo de estaciones, tan estrecha en el caso de los agricultores y tan distante en el de los

funcionarios, sino también en la noción colectiva de cada grupo acerca de las causas subyacentes de estas protestas. Aún aquellos funcionarios que reconocían las causas sociales o ecológicas de las protestas, hicieron eco de la prensa conservadora de San José, culpando a los "izquierdistas", "comunistas", "agitadores" o simplemente los "cabecillas". El Ejecutivo Municipal de Santa Cruz, Eduardo Pizarro, comentó, por ejemplo, sobre "el sufrimiento y total abandono" de los campesinos del cantón por parte de los que definían las políticas agrícolas, pero declaró también que "la masa siempre está conducida" y que sus líderes eran unos "irresponsables quienes irritaron a las masas hacia donde ellos no deben de ir." Los agricultores, por otro lado, disputaron la acusación de que fueron manipulados, aún hasta el extremo irrealista de insistir que los dirigentes de su organización no tuvieron injerencia alguna. "Aquí de cabecillas no hay nadie", recalcó un residente del pueblo Juan Díaz de Nicoya, "aquí hubo un montón [de cabecillas]." Asimismo, los agricultores rechazaron indignados la acusación de "comunistas" y, más bien, hicieron hincapié en su desesperación al llegar la época de siembra después de tres años de sequía, su indignación por las promesas incumplidas por el gobierno o las amenazas a su "derecho de cultivar".

Fuentes de experiencia organizativa

George Rudé, en una discusión sobre las protestas populares que tiene especial relevancia para el caso guanacasteco, distingue entre la ideología "inherente", basada en la experiencia directa y la memoria colectiva de un pueblo —denominado por Rudé también como la "ideología de leche materna"— y las ideas "derivadas", tomadas como préstamo de otros y que "son a menudo una destilación más sofisticada de la experiencia popular y las creencias 'inherentes' del pueblo." La "ideología de leche materna" entre los pequeños propietarios guanacastecos, incluye un muy fuerte compromiso y apego a la cultura de maíz y, en términos más amplios, al "derecho de cultivar", así como un fuerte anhelo por la tierra, en especial entre los que son arrendatarios, aparceros o precaristas y no propietarios. No obstante, el problema de la tierra no figuró como objetivo importante de esta movilización de agricultores, principalmente porque

esta movilización de agricultores, principalmente porque sentían que la amenaza fundamental a su forma de vida se dirigía, en sentido inmediato, no contra sus tierras, sino contra su capacidad de hacerlas producir. También importante para esta alianza que eventualmente abarcó a representantes de todos los estratos sociales, desde aparceros pobres hasta productores millonarios de arroz, fue el hecho de que el problema de la tierra es, en esencia, un problema de distribución que responde a los intereses de clase social, que sólo hubiera traído consecuencias divisionistas.

Diversas fuentes de ideologías "derivadas" se conjugaron con ese apego más fundamental —que Rudé denomina "ideología de leche materna"— a la necesidad y el derecho de cultivar. Pero quizá más importantes que el contenido propiamente dicho de las corrientes ideológicas de origen externo, fueron las fuentes enormemente ricas de experiencia organizativa que obtuvieron los campesinos en otros contextos. Los residentes de las comunidades en las zonas altas —Vistalmar, La Esperanza, Cola de Gallo y otras— habían luchado en forma independiente y en sus Asociaciones de Desarrollo Comunal por la construcción y mejoramiento de caminos y por obtener escuelas y servicios básicos. Aún cuando los servicios seguían siendo inadecuados y, como observaron algunos de ellos, los caminos se reparaban "sólo cada cuatro años durante la campaña política para que los políticos puedan pasar en sus Mercedes Benz", la experiencia de haber participado en un esfuerzo colectivo dejó un importante cuerpo de conocimientos prácticos y una sensación residual de poder.

A mediados y finales de los setenta, las zonas altas también fueron escenario de una labor organizativa desarrollada por Católicos progresistas con influencia de la teología de la liberación. Una de las ironías de este proceso de concientización, es el hecho de que uno de sus promotores era el Ejecutivo Municipal de Santa Cruz en 1988 y fue "tomado rehén" en su oficina por algunos de los campesinos que él mismo ayudó a capacitar. Eduardo Pizarro recordó que a mediados de los setenta,

Yo pertenecía al movimiento de cursillos de cristiandad. Entonces estaba muy en boga toda la situación de Nicaragua y toda la cosa, que produjo en Hispanoamérica un cambio de conciencia y una actitud un poco diferente. Un grupo de sacerdotes, y yo participé como dirigente del grupo, hicimos un cambio de conciencia en esa

gente de arriba. Ayudamos a preparar junto a esos sacerdotes a mucha gente de esas, delegados de la palabra, más o menos como quinientos. Son capaces de entrar en un combate, en una lucha, es gente de mucha pelea.

Aunque seguramente el cálculo que hace Pizarro del número de delegados de la palabra capacitados en las zonas altas de Santa Cruz en los setenta es exagerado, es bastante acertado en su apreciación de los cambios de conciencia que experimentaron al menos algunos de los dirigentes de las pequeñas comunidades de las zonas altas. Hoy en día, pocos utilizan las imágenes bíblicas para describir su situación o sus esfuerzos colectivos por lograr un cambio, pero el lenguaje de los agricultores —que en muchos casos está repleto de referencias al carácter sagrado de "los humildes" y el sufrimiento como el destino de los pobres— revela una familiaridad, por más indirecta que sea, con esta ideología "derivada".

La experiencia de trabajar como obreros en otras partes de Costa Rica ha jugado un papel fundamental en la socialización política de los guanacastecos rurales, en particular de los hombres jóvenes. Son tantos los guanacastecos que emigran para trabajar en las plantaciones bananeras de las provincias de Limón y Puntarenas, que generalmente se refieren a ellas, familiar y simplemente, como "la zona". Durante unos cincuenta años —desde la huelga bananera de 1934 hasta la división del partido comunista costarricense, Vanguardia Popular, en 1983— los sindicatos bananeros estaban entre los mejor organizados y más militantes en el país. Aunque los sindicatos bananeros, de orientación comunista, han jugado un papel central en la educación política de varias generaciones de campesinos guanacastecos migrantes, las enseñanzas concretas dejadas por estas experiencias —en particular después de las disputas faccionales y las huelgas fracasadas a mediados de los ochenta— no siempre han quedado claras. Para algunos, la opción de trabajar por largos períodos en las zonas bananeras fue motivada en gran parte por sueños individualistas de acumulación, por el anhelo de regresar a casa con capital para comprar tierras, una tiendita o un negocio. Para otros, con motivaciones menos ambiciosas que giraban en torno a la mera sobrevivencia, la migración representaba un fenómeno temporal o estacional, que no permitió su plena identificación como obreros o sindicalistas mientras permanecían en "la zona". A mediados de los ochenta, la United Brands cerró sus operaciones bananeras

en la Zona Sur, generando así un mayor flujo migratorio de retorno a Guanacaste. Sin embargo, ya de regreso en sus comunidades, pocos migrantes guanacastecos han seguido con una militancia activa y, sobre todo en los últimos años, muchos más bien se han desilusionado y amargado respecto a la izquierda organizada y los sindicatos que los lanzó a huelgas mal preparadas y fácilmente derrotadas.³⁶ No obstante, para muchos campesinos guanacastecos su participación en el movimiento obrero en las zonas bananeras desmitificó la estructura de poder y les proporcionó las herramientas para organizarse y luchar.

También a muchos que habían participado en organizaciones conservadoras, como las iglesias evangélicas o las asociaciones solidaristas, con fuerte injerencia patronal³⁷ y que desde principios de los ochenta han ido desplazando a los sindicatos en las zonas bananeras, les quedaron enseñanzas acerca de los beneficios de la acción colectiva y, frecuentemente, ignoraron o excusaron las ideologías de las que surgieron y que imbuyeron esas experiencias. Pedro Ruíz, un joven agricultor del pueblo de Florida y que vivió por varios años en Limón, ilustra esa tendencia en su comentario acerca de su transformación del comunismo al solidarismo:

En la zona [bananera], para ser sincero, he estado en más de una organización. Y he visto los movimientos. Yo fui un gran comunista en la zona. Idiay, y después, es que me lavaron el coco, no sé, y me pasé al otro bando, a la asociación solidarista. Pero como digo, sí sé qué es la organización y es muy buena. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Lo que necesitamos es organizarnos.

Este caudal de experiencia y aspiraciones organizativas, hasta el momento muy poco aprovechadas en Guanacaste, tiene sus paralelos en otras regiones de Costa Rica. Inicialmente, el desarrollo de una conciencia colectiva entre los pequeños agricultores de Santa Cruz se debió menos a sus propias luchas locales que a una creciente conciencia sobre los acontecimientos en otras partes del país, donde el movimiento campesino venía desarrollándose desde 1986, en términos de su militancia, presencia y sofisticación. En setiembre de ese año, varios cientos de campesinos realizaron una marcha en San José para protestar contra las recién anunciadas políticas sobre granos básicos y fueron dispersados con gases lacrimógenos y garrotes por

la Guardia Civil. Este acontecimiento, visto por muchos costarricenses como una violación a sus tradiciones de tolerancia y libertad de expresión, aglutinó la oposición entre los agricultores de diversas regiones contra las políticas estatales de ajuste económico³⁸. En Santa Cruz, la presencia de dirigentes comunales que habían asistido al colegio ahí mismo o en San José y que, por tanto, estaban familiarizados con las peculiaridades de la política nacional, facilitó el proceso de primero observar y explicar, para luego realizar foros y formar comités. Sin embargo, la redefinición por los campesinos de sus posibilidades políticas surgió también de una nueva alianza que trajo una sensación de fuerza y de eficacia.

La alianza entre clases y las expectativas del Estado

El endeudamiento y la descapitalización provocados por la crisis no sólo afectaron a los pequeños propietarios, aunque las consecuencias de las repetidas pérdidas de las cosechas fueron más drásticas para este sector. Los grandes ganaderos y productores de arroz —incluso algunos que dirigentes campesinos sarcásticamente contaban entre "los veinticinco dueños de Guanacaste"— también sufrieron enormes pérdidas y no pudieron cumplir con los pagos de sus deudas. Productores de arroz que no contaban con riego encontraron que les habían restringido el acceso al crédito para favorecer a un pequeño grupo de productores con tierras irrigadas, mientras que los ganaderos —arrinconados por una combinación de precios estancados y crecientes tasas de interés y costos de producción— sacrificaban sus hatos más rápido de lo que éstos se reproducían. Es cierto que estos dueños de cientos y hasta miles de hectáreas no se enfrentaban a un proceso de proletarización, al hambre, al encarcelamiento o a la pérdida de su forma de vida, pero su situación formal ante los bancos era muy parecida a la de los pequeños productores (aunque algunos sí se beneficiaron de los nuevos recursos disponibles para productos no tradicionales de exportación).

Las cámaras de grandes productores tradicionalmente ejercían una enorme influencia en el sistema político costarricense.³⁹ Pero, con la introducción de la "agricultura de

cambio", la Federación de Cámaras de Ganaderos, la Cámara de Arroz y la Cámara Nacional de Granos Básicos descubrieron que sus métodos de ejercer influencia eran ya insuficientes y comenzaron a buscar nuevos aliados. Tanto los grandes productores como los pequeños podrían beneficiarse de cualquier acuerdo que se lograra con los bancos que readecuaran las deudas y aumentara el crédito disponible para el sector productor de granos.⁴⁰ Estos dos grupos también se complementaban en cuanto a sus capacidades para ejercer presión: las Cámaras, representando a un número relativamente reducido de productores, tenían importantes vínculos con el Estado desde hace mucho tiempo y eran expertos en el teje y maneje del proceso político, mientras que las organizaciones de pequeños agricultores podían movilizar grandes masas de personas para marchas u otras demostraciones de fuerza. Aunque la reforma agraria constituía un elemento de potencial discordia y de mutuas sospechas entre los dos grupos, no fue un punto primordial en la agenda política de ninguno de ellos. Además, la posibilidad de que los grandes productores pudieran pagar sus deudas con tierras, que luego podrían ponerse a disposición de los pequeños agricultores a través del IDA o los bancos, disminuyó las tensiones alrededor de este tema ya de por sí conflictivo.

El movimiento en Santa Cruz

En Santa Cruz, la expectativa más inmediata de los campesinos con respecto al Estado, y la causa próxima que los llevó a dar sus primeros pasos organizativos, involucraba al Fondo Nacional de Contingencias Agrícolas, que se suponía debía indemnizar a los agricultores de regiones donde ocurrieran pérdidas generales de cultivos. En "épocas normales", los agricultores consideraban que el Fondo, financiado por un impuesto del 3 por ciento sobre los granos vendidos al CNP, era un estorbo costoso y, al igual que el Fondo Nacional de Emergencias, que se vio envuelto en un escándalo donde se implicaba a un expresidente y un exvicepresidente, una posible fuente de "chorizos" políticos. Pocos pequeños propietarios creían que el impuesto, que ellos consideraban un "castigo", junto con los gravámenes del CNP que "castigaban" el exceso de humedad o de tierra en

sus granos, no beneficiaría a nadie más que a "los grandes" —los grandes productores de arroz con conexiones políticas y cuyos representantes formaban parte de la Junta Directiva del Fondo. Sin embargo, después de tres años de pérdidas debido a la sequía, el Fondo parecía ser una de las pocas soluciones posibles para un campesinado cada vez más endeudado, descapitalizado y desesperado.

En octubre 1987, luego de un mes de negociaciones entre las instituciones estatales y las organizaciones de agricultores en otras partes del país, el MAG inició la recolección de datos sobre las pérdidas sufridas ese año por la sequía en Guanacaste.⁴¹ Respondiendo a esta demostración de interés de arriba, los campesinos comenzaron a organizarse —"en forma espontánea", como recordaron algunos— para coordinar la recopilación de información sobre los costos y pérdidas de producción. En octubre y noviembre, se reunieron representantes comunales para presentar una posición unitaria al gobierno respecto a las pérdidas de producción, así como sus necesidades de crédito, riego y mejores garantías de precios (Primer Encuentro Campesino 1987). Emisoras locales de radio, en particular Radio Chorotega, propiedad de la Iglesia, alentaban a los miembros de comunidades remotas para que discutieran acerca de sus propias pérdidas y necesidades, e informaban acerca de las reuniones a nivel regional.⁴² Según recordó después el dirigente campesino local, Marcos Ramírez, era un proceso que el gobierno "sabía promover, pero no sabía cómo lo iba a controlar."

En enero de 1988, el Ministro de Agricultura invitó a las organizaciones de productores a San José para presentarles los nuevos programas crediticios que regirían durante ese año. Sin embargo, una vez más, el gobierno —confiado quizá en los estereotipos del "conformismo" campesino había malinterpretado el nivel de descontento en el campo. En lugar de aceptar el informe del Ministro, los representantes invitados decidieron allí mismo formar un "frente" que abarcaría todo el sector agropecuario. Un campesino que participó en la reunión, recordó, atónito, la opulencia del lugar donde se efectuó y la ingenuidad del Ministro:

Ahí, en el despacho del Ministro de Agricultura, en medio de copas de vino y whiskey y todas las cosas que ellos toman, el Ministro, junto con los grandes agricultores, y los pequeños, impulsan la formación de UNSA [Unión Nacional del Sector Agropecuario].

La UNSA, aunque finalmente probó ser una unión por conveniencia que duró poco tiempo, funcionó durante la primera mitad de 1988 como un grupo de presión significativo y, discutiblemente, como un freno parcial y momentáneo a los planes gubernamentales de imponer adicionales medidas de austeridad.⁴³ La comunidad de intereses percibida entre los grandes productores y los pequeños, se convirtió también en el fundamento para una transformación, de inspiración política, en la autoidentificación de los pequeños productores. En lugar de describirse como campesinos, un término que implicaba condiciones productivas precarias y a pequeña escala, los pequeños productores más politizados de Santa Cruz iban adoptando la denominación de "agricultor", un término más neutral con respecto a criterios de escala y menos cargado de significados culturales. Sin embargo, lo que en un inicio fue una denominación neutral que facilitaba la alianza entre clases sociales, en poco tiempo se convirtió en un término cargado de connotaciones políticas, conforme los agricultores se iban enfrentando al Estado.

En los primeros meses de 1988, el proceso organizativo procedió aceleradamente a nivel nacional y en Guanacaste. En enero, la UNSA advirtió que sus miembros suspenderían los envíos de alimentos a San José y ciudades circunvecinas si el gobierno no designaba una comisión bipartita, con representantes de ambas partes, para negociar los problemas de la readecuación de las deudas, el crédito y precios de sustentación. La Cámara de Ganaderos de Guanacaste cortó el abastecimiento de carne a las áreas urbanas de la Meseta Central durante tres días, para demostrar lo que podría ocurrir a mayor escala si la UNSA llevara a cabo sus amenazas.

Con tres años de cultivos dañados por la sequía, enormes deudas y pocas posibilidades de obtener préstamos, muchos guanacastecos consideraban que la pronta indemnización por parte del Fondo de Contingencias para cubrir las pérdidas de la temporada anterior, constituía su única esperanza de conseguir capital para poder sembrar. El 27 de febrero de 1988, más de doscientos agricultores se reunieron en Santa Cruz para fundar la Asociación de Pequeños Productores del Pacífico Seco (ASPPAS). La primera acción tomada por ASPPAS fue invitar a un funcionario del MAG para presentarle con un documento que describía las pérdidas por la sequía y detallaba las necesidades de sus miembros de contar con acceso a riego, asistencia técnica y crédito. El

representante del Ministerio se comprometió a entregarles una respuesta en dos semanas. Marcos Ramírez, un dirigente de ASPPAS de 26 años de edad, con estudios secundarios, padre de dos hijos y miembro de una cooperativa agrícola en el pueblo de Santa Bárbara, contó lo que sucedió a continuación:

Esperamos un mes, dos meses, y nada. Mandamos telegramas, cartas. El campesino se sentía engañado. En Guanacaste tenemos que sembrar antes del veinte de mayo. No se puede sembrar cuando le dé la gana.

Aunque en febrero el gobierno había accedido a la demanda de la UNSA de que formara una comisión negociadora bipartita, integrada por representantes del gobierno y de la UNSA, este reconocimiento de la legitimidad de esta coalición de agricultores no fue acompañado por pasos encaminados a resolver los problemas urgentes de los productores, ni siquiera después de dos meses de discusiones. El 18 de abril, pocas semanas antes de comenzar las lluvias, la UNSA le entregó al Presidente Oscar Arias un documento que esbozaba la problemática a que se enfrentaba el sector agropecuario y proponía una serie de soluciones a corto y mediano plazo. Dada la urgencia, por la cercanía del período de siembra, la organización pidió que le respondiera dentro de diez días. Exactamente un mes después, el Ministro de Agricultura públicamente dio a conocer la respuesta del gobierno, que fue considerada totalmente inadecuada por los miembros de la UNSA, en especial por los pequeños productores de granos.⁴⁶

La "huelga" en Santa Cruz

ASPAPAS en Santa Cruz aún no formaba parte de la UNSA, pero sus miembros y dirigentes seguían atentamente los acontecimientos a nivel nacional. Las negociaciones entre la UNSA y el gobierno ejercían una influencia cada vez mayor sobre el proceso de movilización política local, conforme los agricultores cobraban conciencia de la necesidad de unir esfuerzos con sus colegas en otras regiones para ejercer una presión efectiva. El 22 de abril, por ejemplo, poco después de que la UNSA le hizo entrega del documento al Presidente Arias, varios cientos de miembros de ASPPAS realizaron una marcha en Santa Cruz para reivindicar su "derecho a cultivar". Efectuaron breves "tomas simbólicas" de las oficinas de

las instituciones del sector agropecuario, el IDA, el CNP, el MAG y el Banco Nacional, y en cada una les entregaron documentos a los funcionarios en que se esbozaban sus necesidades específicas. Su última visita fue a la Municipalidad de Santa Cruz, donde pidieron el apoyo del gobierno local.

El 9 de mayo, todavía sin ninguna respuesta del Presidente, organizaciones campesinas en diversas partes del país realizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras para protestar la falta de acción del gobierno. En Santa Cruz, el bloqueo de la carretera duró tres horas antes de que los cientos de participantes decidieron irse. Se trataba, como algunos comentaron luego, de una "amenaza" provocada por su desesperación y para demostrar lo que podría suceder si no obtuvieran los recursos necesarios para sembrar. A finales de mayo y principios de junio, dirigentes de ASPPAS consultaron con las asambleas de afiliados en treinta y seis comunidades en los alrededores de Santa Cruz, para definir sus próximos pasos. Algunas de las ideas más creativas presentadas por los dirigentes, como, por ejemplo, soltar docenas de pollos en las oficinas del Banco Central en San José para dramatizar la incapacidad de los campesinos de producir maíz amarillo, fueron rechazadas de inmediato por las asambleas. A cambio, los miembros de ASPPAS optaron por sumarse a la UNSA en una "huelga" a nivel nacional, que establecería un "bloqueo definitivo" de carreteras por un período indefinido.

En la mañana del 8 de junio, agricultores de diversas regiones productoras de granos bloquearon los puentes de las carreteras para exigir el pago de las pérdidas por la sequía, mejores condiciones y mayor acceso a crédito y precios "justos" para los productores.⁴⁵ El carácter de estas manifestaciones en Guanacaste, reflejó la composición multiclassista de los participantes, así como sus diferentes capacidades de movilización. En Santa Cruz, pequeños productores tomaron la carretera en las afueras de la ciudad, mientras que más al norte, en Guardia de Liberia, una zona de grandes propiedades, algunos de los agricultores más prósperos de la provincia lograron un efecto similar al estacionar tractores y segadoras en el puente sobre el Río Tempisque. Este contraste entre los que bloquearon los puentes "con sus cuerpos" y los que lo hicieron "con los cuerpos de sus empleados y su maquinaria", simbolizó las tensiones

inherentes a la coalición de UNSA, así como los diferentes riesgos personales que afrontaron los pequeños productores y "los grandes".

Veinticuatro horas después, a las 5:00 a.m. del día 9 de junio, la Guardia Rural envió varios centenares de hombres fuertemente armados al puente de Santa Cruz y amenazaron con lanzar granadas de gases lacrimógenos. Los Guardias Rurales, según comentó después uno de los participantes en la manifestación, eran "señores vestidos de un color que no era ni azul ni verde." Otro recordó que "la Guardia estaba lista con granadas y chunches — el diablo entero."

Johnny Brealey, un productor de arroz con buenas conexiones políticas y miembro de la UNSA que participó en el bloqueo del puente en Guardia, apareció con un mensaje del gobierno, que comunicaba que el Ministro de Agricultura había aceptado reunirse con una delegación de cada región. Ante la amenaza de los gases lacrimógenos, una oferta de diálogo con el gobierno y el hecho de que sus aliados, los grandes productores, ya estaban quitando sus tractores y segadoras del puente de Guardia, los manifestantes en Santa Cruz acordaron levantar su bloqueo. Dos dirigentes de ASP-PAS, Marcos Ramírez y Ezequiel Gómez, partieron para San José en la avioneta de Brealey para reunirse con el Ministro, mientras los demás manifestantes se reagruparon en las oficinas locales de la Cámara de Ganaderos. Ramírez recordó que,

No teníamos suficiente experiencia en este tipo de acciones. Cuando nosotros llegamos a San José, nos dimos cuenta de que fuimos objetos de un engaño.

Cuando llegaron los representantes guanacastecos al MAG, nadie estaba para recibirlos, así que viajaron a Guácimo, Limón, donde unos 1.500 campesinos mantenían bloqueos en las carreteras y en la línea del ferrocarril. Los agricultores guanacastecos desconocían el hecho de que sus colegas en Guácimo y Parrita habían rechazado la oferta de dialogar con el Ministro por considerar que éste no tenía ningún poder real de decisión. Asimismo, ellos regañaron a los representantes de ASPPAS por haber levantado el bloqueo en Santa Cruz.

Sin embargo, Guácimo era el único lugar del país donde aún se mantenía en pie la "huelga". En Guanacaste se habían levantado los bloqueos en Santa Cruz, Guardia y Cañas. En Parrita, en la costa Pacífico central, los manifestantes

levantaron el bloqueo de la carretera y dos de sus dirigentes fueron detenidos por la Guardia Rural. A los ojos de los agricultores, ésto parecía ser otro indicio más de la inconsistencia o la mala fe del gobierno. "¿Cómo íbamos a negociar con compañeros en la cárcel?" preguntó un dirigente de ASPPAS.

Después de que partieron Ramírez y Gómez para San José en busca del Ministro de Agricultura, los manifestantes congregados en las oficinas de la Cámara de Ganaderos de Santa Cruz oyeron un reportaje en Radio Chorotega sobre las detenciones en Parrita, el "engaño" por parte del Ministro y el debilitamiento de la "huelga" en el resto del país. Además, caía un fuerte aguacero, que para muchos fue un recuerdo desagradable de su falta de recursos para sembrar, a la vez que constituía, en términos prácticos, un obstáculo para la reanudación de una protesta prolongada al aire libre.

Poco después de las nueve de la mañana siguiente, un camión grande, tapado con una lona y cubiertas sus placas, pasó a toda velocidad frente al contingente de Guardias Rurales que aún vigilaban la carretera y se introdujo por el portón del edificio municipal de Santa Cruz. Allí docenas de campesinos indignados se arrojaron del vehículo y entraron al edificio cavernoso, donde aseguraron las puertas con palos y anunciaron una "toma". En pocos minutos, antes de la llegada de la Guardia Rural, otros se unieron a los que arribaron en el camión, llegando así a un total de unos doscientos manifestantes. Según Ramírez, quien venía de regreso de Guácimo en ese momento, "los dirigentes del movimiento fuimos superados por los agricultores, nos habíamos quedado desplazados."

Lo que sucedió a continuación varía según dos discursos diametralmente opuestos. Estas versiones contendientes ilustran, sin embargo, la marcada influencia de las agendas políticas y personales en la reconstrucción de los acontecimientos por parte de los protagonistas de ambas partes.⁴⁶ El Ejecutivo Municipal, Eduardo Pizarro —"tomado rehén" en su oficina por los manifestantes— luego comentó:

No soy campesino. No siembro la tierra, ni soy ganadero. Soy de una familia de músicos, comerciantes y políticos. Pero mis raíces son aquí. Yo vengo de una familia que puede tener 250 ó 300 años de vivir aquí, una familia que hizo este pueblo.

Cuando los agricultores tomaron el edificio, Pizarro se encontraba en su oficina atendiendo a dos visitas, uno de

ellos "un norteamericano que venía a invertir" en el cantón. Luego de obtener permiso de los manifestantes en el patio para que pudieran salir sus visitas por una puerta lateral, él se enfrentó a los que estaban dentro del edificio con lo que él describió posteriormente como "valor":

Cerré la puerta y salí a ver qué pasaba. Me empujaron y me gritaron lo que a ellos les daba la gana. Yo les dije que fueran a la mierda y les advertí que la situación del país no estaba para eso. Teníamos el conflicto de Panamá a un lado y el conflicto de Nicaragua al otro, y nosotros no podíamos provocar una situación a ese nivel de campesinos en el país porque era sumamente peligroso, atentaba contra la estabilidad del país.... Yo les dije que era preciso ser hombres, que eran una manada de pendejos e hijos de puta, verdad? Les dije que no iba a acceder a lo que ellos querían, que era doblarme las rodillas, que tenían que matarme primero. Le dije a uno de ellos, 'Cuando ésto termine, búscame en la calle y lo resolvemos a golpes, pero no seas maricón aquí en la oficina con ese montón de perros que tenés aquí.'Lo que ellos planteaban —su sufrimiento, su dolor, su necesidad— estamos acordados, existe, y el gobierno ha sido responsable, ha sido miope. Pero eso no significaba que no fuera una situación muy peligrosa para el país.

La situación se calmó, observó Pizarro, cuando el secretario de ASPPAS, Marcos Ramírez, de vuelta de su fracasada misión negociadora en San José y Guácimo, logró pasar inadvertido por el cordón montado por la Guardia Rural alrededor del edificio, para unirse a los manifestantes. Se permitió que las empleadas municipales, así como funcionarios de la Controloría General de la República de visita en la Municipalidad, salieran del edificio, y acordaron permitir a las dos partes usar el teléfono. Pizarro luego recordó que, confinado a su oficina junto con tres centinelas campesinos, planeaba escaparse con su asistente, atacando a los manifestantes para luego tirarse por un ventanal, el único en el edificio que no tenía rejas.

En la tarde, el Consejo Municipal se reunió en las afueras del edificio y acordó presentar cargos ante el Juez de Instrucción de Santa Cruz, que también estaba presente. El juez entonces les dio a los agricultores una hora de plazo para que "soltaran" a los once empleados municipales que aún estaban dentro del edificio. A las cinco de la tarde, salieron los empleados. Sin embargo, persiste la discusión acerca de si eran "rehenes" liberados o simplemente terminaron su día laboral. Los campesinos insisten en que les habían pedido a los empleados que salieran, pero que ellos no lo quisieron

hacer, mientras que otros, como Pizarro, insisten que les obligaron a permanecer contra su voluntad.

Los campesinos que ocuparon la municipalidad citaron una serie de razones para justificar esta acción, que iban desde la asistencia que tradicionalmente se les había brindado allí, hasta la necesidad de tomar refugio de la lluvia o de reanimar su "huelga" decaída. Pero todos coincidían en que Pizarro "se portó con nosotros como un verdadero caballero."

Se puso ahí a temblar y pidió que por favor no le hiciéramos nada. Se puso todo nervioso ahí. Creía que íbamos a agredirlo nosotros. La verdad es que el motivo de nosotros no era agredirle a nadie. Venimos con otro objetivo.

Después de que los campesinos explicaron sus demandas de acceso a crédito y el pago de indemnizaciones del Fondo de Contingencias, el Ejecutivo Municipal

se puso de acuerdo con nosotros. Siguió colaborando con nosotros, llegaba a comunicar con nosotros, si estábamos bien, qué nos faltaba. En ningún momento nos pidió permiso para salir de ahí. No nos dijo 'quiero salir.' Nadie nos lo dijo. Hablamos con los empleados, los trabajadores ahí. Siguió con su trabajo, recibía llamadas y todo.

La versión de los acontecimientos dada por estos agricultores difiere totalmente de la descripción de Pizarro de su propio machismo agresivo. Otro campesino recordó que el Ejecutivo los intentó reclutar para una acción que llamaría la atención sobre el estado de abandono de la provincia en que la ha dejado el gobierno nacional.

Antes de salir se reunió con nosotros y él dijo que ellos habían hecho una petición al gobierno y que si antes del 25 de julio [Día de la Anexión de Guanacaste] no se había cumplido, ellos habían tomado la decisión, la Liga de Municipalidades de Guanacaste, de hacer una toma del puente del Río Lagarto [que divide a Guanacaste de la región central del país]. Entonces nos pidió la colaboración de nosotros, si estábamos dispuestos a colaborar con ellos en la toma del puente. Dijimos 'de acuerdo,' mientras que él fúera a la cabeza y todas las municipalidades, entonces nosotros los acompañamos.

Por último, según los agricultores, Pizarro y su asistente, antes de salir, ofrecieron su ayuda en caso de que surgieran problemas con la Guardia Rural.

Ellos decían que si la Guardia molestaba, si quería romper la puerta, que los llamáramos. Ellos inmediatamente volvían a hacernos compañía a nosotros. Con ellos adentro era imposible que la Guardia se metiera.

Cuando salieron los dos funcionarios, según recordaron los agricultores con cierta amargura, "ahí había aplausos para el Ejecutivo y toda la cosa."

Aquella noche, después de salir los empleados municipales, los agricultores permanecieron dentro del edificio. Aunque, en términos generales, la toma de la municipalidad había sido bien planificada, los participantes no habían traído alimentos, pensando que otros que estaban afuera les entregarían comida después. Sin embargo, la Guardia Rural rehusó dejar que nadie entrara o saliera, incluyendo dos agricultores dentro del edificio que se habían enfermado. Sólo después de la intervención del Arzobispo de Tilarán, aproximadamente a las 11:00 p.m., se logró que la Guardia Rural permitiera que simpatizantes de ASPPAS les entregara comida —gallo pinto que se había preparado en la mañana y ya a esas horas tenía un sabor "agrio y feo." Por último, esa noche también fueron cortados los teléfonos, la electricidad y el agua.

Al día siguiente, el 11 de junio, aumentaron las presiones de ambas partes para lograr una resolución del conflicto, que había llegado a un punto muerto. Los agricultores afirmaron que no saldrían hasta que el gobierno no aceptara designar una comisión encargada de resolver las demandas presentadas no sólo por la "huelga" en Guanacaste, sino también en el resto del país. Los directores cantonales y distritales de la Guardia Rural solicitaron permiso para entrar a la municipalidad para averiguar si los manifestantes estaban armados y recoger información, petición que fue aceptada bajo la condición de que entraran desarmados. Los oficiales de la Guardia Rural solicitaron, además, los nombres de todos los que se encontraban dentro del edificio y los agricultores, por considerar que no habían cometido ningún delito, aceptaron, aunque algunos se rehusaron o, como precaución, dieron nombres falsos. Según los agricultores, después de entrar al edificio, el Director Cantonal de la Guardia, Saúl Briceño, les dijo que no tuvieran miedo, que todo podría solucionarse pacíficamente. Pero también les informó que esas pequeñas esferas que llevaban los Guardias Rurales en sus cinturones eran granadas que causaban vómitos,

mareos y diarrea. "Si fuera cuestión de sacarlos, agarramos unas bombas de éstas y los sacamos en quince minutos. Se van al carajo."

Uno de los participantes recordó que, "entonces la situación había cambiado y la gente tenía un poquillo de miedo." No obstante, la ocupación del edificio no terminó debido a una simple demostración de fuerza de parte de la Guardia Rural. En la mañana del día sábado, 11 de junio, el gobierno ofreció enviar un automóvil para llevar a los representantes de los agricultores a Guácimo a una reunión con una comisión técnica. Los manifestantes aceptaron, pero afirmaron que sólo dejarían el edificio después de que sus representantes llegaran a Guácimo. Sin embargo, pasaron las horas y en la tarde, ya no estaba tan animado el ambiente dentro de la municipalidad. Uno de los participantes que se quedó hasta el final, afirmó que "les dimos permiso [a la gente] de que se [fueran] saliendo. Y ya por último cuando salimos éramos como treinta, los demás se habían ido."

Por otro lado, ya en Guácimo, se reunieron los dirigentes de ASPPAS y de las otras organizaciones de agricultores, primero con la comisión y, luego con la Primera Dama de la República, Margarita Penón de Arias, enviada para negociar por parte del gobierno, quien se comprometió que su esposo se reuniría con los agricultores y que no habrían represalias. El 16 de junio, el Presidente Arias se reunió con veintiseis representantes de la UNSA y se comprometió a nombrar comisiones para estudiar los precios de sustentación, el crédito, el acceso a la tierra, indemnizaciones por las pérdidas de cultivos y otras reivindicaciones planteadas en la "huelga". Una semana después, el gobierno anunció que no aumentaría los precios del maíz ni de los frijoles, pero que se suministrarían insumos a bajo costo a través de los Centros Agrícolas Cantonales. Se comprometió, además, a aumentar el financiamiento del IDA, así como el crédito bancario disponible para el sector.

Poco después de estas declaraciones oficiales, el día 27 de junio, unos quinientos miembros y simpatizantes de ASPPAS se congregaron en el único cine de Santa Cruz para discutir acerca de sus próximos pasos. Para probar las promesas del gobierno, se presentó un contingente de unos cien agricultores en la agencia local del Banco Nacional para solicitar préstamos para financiar la siembra postrera

que se iniciaría en agosto. Allí les informaron que los únicos préstamos disponibles a través del programa para pequeños agricultores, eran de diez mil colones (unos US\$143) por hectárea de maíz o frijoles —aproximadamente la tercera parte del costo real promedio de operación. Otro grupo se presentó en el IDA para solicitar las parcelas que se suponía estarían disponibles como parte de una "nueva" asignación del programa de reordenamiento agrario, por un valor de cien millones de colones. Los funcionarios del IDA les informaron que los fondos ya estaban comprometidos en un programa para el que ya había una lista de espera de seis años. El problema de las pérdidas a causa de la sequía aún estaba bajo estudio por una comisión presidencial.

A la salida del cine, Ramírez, el secretario de ASPPAS, fue esposado por un Guardia Rural, llevado a la cárcel y acusado de secuestro, usurpación de la propiedad y de instigar contra el orden público. Docenas de campesinos que se encontraban en la ciudad para la asamblea, se acercaron a los Guardias Rurales pidiéndoles que también los llevaran presos, ya que todos eran culpables de los mismos delitos. Juvencio Matarrita, un agricultor de ochenta años, recordó su respuesta cuando intentó visitar a Ramírez en la cárcel y los oficiales le preguntaron, "¿quién es él de Ud.?"

Soy agricultor, de esos que producen para que todos comamos, para que coma el policía, para que coma el juez, para que coma el abogado. Y quisiera verlo a Marcos Ramírez, que está preso por nosotros los agricultores.

Ante los rumores que empezaron a circular de que los campesinos podrían intentar liberar a Ramírez, la Guardia Rural lo trasladó a Liberia, a una hora de camino de Santa Cruz. Después de doce días en la cárcel, simpatizantes, incluyendo algunos de "los grandes", reunieron treinta mil colones (aproximadamente US\$430) para pagar la fianza, logrando así la libertad del joven dirigente.

Las consecuencias de la "huelga": "Se acabó el tiempo"

El día después de su excarcelación, el abogado de Ramírez le informó que se habían dictado órdenes de

detención para otros sesenta agricultores, en su mayoría dirigentes comunales de ASPPAS.⁴⁷ Durante la última semana de julio, la Guardia Rural apresó a varios campesinos en el pueblo de Veintisiete de Abril, capturó a otros que se encontraban en Santa Cruz desempeñando trabajos ocasionales y bajó a otros cuatro de autobuses provenientes de las zonas altas. Algunos de los "más buscados" huyeron a San José para esconderse por unos días. Sin embargo, la mayoría de los imputados en las órdenes de detención, permanecieron en las zonas altas, donde la Guardia Rural no tenía puestos permanentes y era fácil vigilar la entrada de vehículos. Menos de la cuarta parte de los requeridos pasaron algún tiempo en la pequeña cárcel de Santa Cruz y, de ellos, la mayoría sólo estuvo detenida por un día.

Como consecuencia de las detenciones, primero de Ramírez y luego de los otros manifestantes acusados, la denominación *agricultor* iba cobrando, cada vez más, un nuevo significado dentro del discurso local. Al verse insertada repentinamente dentro de un nuevo contexto antagónico, esta categoría, neutral con respecto a criterios de clase social y que abarcaba desde el terrateniente más acaudalado hasta el aparcerero más marginado, fue asumiendo connotaciones de persecución y dignidad, casi convirtiéndose en sinónimo de una ofensa punible. Este cambio se ejemplifica en los comentarios hechos por María Bonifacia Mena, una abuela de cincuenta y cuatro años de edad y residente de Oriente de Juan Díaz. Ella cuenta que iba camino a Nicoya para vender frijoles y pipián, cuando fue detenida por la Guardia Rural y acusada de ser una "seguidora" de Ramírez. Al narrar esta experiencia, se preguntó, con voz entrecortada, "si es el destino de uno, de que lo detengan por ser agricultor o por la humildad de uno..." Pero, al preguntarle por qué detuvieron también a su hijo, reaccionó ante la evidente estupidez de la pregunta y respondió con vehemencia: "Pues por agricultor también! "

Al preguntarle a otro de los participantes en la protesta si creía haber cometido algún delito al tomar el edificio municipal, simplemente respondió que,

No, a mi ver no es ningún delito. Para ser agricultor como dicen no es ningún delito porque todos lo hacemos, como pobres que somos.

Otros, como Iris Matarrita, que no habían participado en la toma, se indignaron por los atropellos cometidos por las autoridades contra sus vecinos:

Estoy muy indignada porque a esta gente yo la conozco muy bien, es gente humilde, nunca he sabido que sean ladrones, que sean peligrosos. Ellos no fueron a coger la municipalidad o las calles por caprichos o por huevo. A mí no me gusta que los agricultores los pongan como una chuica, como una cosa que no vale nada. Simplemente que somos agricultores.

Algunas mujeres mayores jugaron un papel muy visible en la movilización de sus comunidades. Quizá debido a su edad, esta participación no chocó con las nociones machistas acerca del comportamiento femenino apropiado y fue bien acogida por los demás participantes, en su mayoría hombres jóvenes. Sin embargo, con la detención de algunas mujeres, se invocaron ideas machistas en sus denuncias contra el gobierno. En una asamblea de unos treinta y cinco campesinos, un joven organizador informó acerca de las recientes detenciones, intercalando términos muy respetuosos con respecto a las mujeres con una jerga vulgar para referirse a los hombres:

Uds. se dieron cuenta de que cayeron dos compañeras y dos carajos más detenidos. No es que uno menosprecie al varón, pero que entre un compañero pues uno lo aguanta. Pero que lleven a una mujer, a una señora como es doña Ramona que es una abuela, que la metan presa para nosotros es insultante.

Sin embargo, Briceño resistió con aplomo su día en la cárcel y ella recordó haber recriminado a su tío, el Director Cantonal de la Guardia Rural, quien había dictado la orden para su arresto.

Le dije que si estábamos sin medios para comer sin duda por órdenes del gobierno, pues íbamos a comer sin duda monte como unos gusanos mientras hubiera monte, y cuando fuera acabado el monte, comeríamos polvo. Y en la cárcel vamos a comer cemento, le digo.

Varios campesinos, refiriéndose a un reciente reportaje de radio sobre una nueva ley ambiental, también compararon a los agricultores con los animales, específicamente con las especies en peligro de extinción:

A los agricultores los están dejando caer como animales salvajes. Al menos que yo sepa, hay una ley protectora de animales. En otras palabras, hay más protección ahora para los animales que para el agricultor. Cómo está la cosa! El gobierno quiere un pueblo muerto de hambre.

No obstante la retórica hiperbólica provocada por la indignación ante la actitud del gobierno, continuaron las negociaciones entre el MAG y la banca nacionalizada, por un lado, y ASPPAS y otras organizaciones, por el otro. Sin embargo, las concesiones hechas por el gobierno, por más bien intencionadas que fueran, cayeron víctima de la inercia de los burócratas, que ignoraban la urgente situación de los agricultores. A finales de julio, el gobierno acordó otorgarles a un máximo de setecientos agricultores en la zona de Santa Cruz, préstamos de "emergencia" por una suma de veinte mil colones (US\$250) por hectárea para el cultivo de frijoles, cuya siembra generalmente se inicia en agosto. Sin embargo, los préstamos estaban condicionados a que el CNP sirviera de fiador, por lo que era necesaria la inspección de las parcelas de los solicitantes. Durante el mes de agosto los técnicos del CNP recorrieron las zonas de cultivo de frijol, inspeccionando las parcelas y hablando con los agricultores. Pero el 23 de setiembre, cuando el CNP finalmente entregó su lista de solicitudes aprobadas, ya casi se había terminado el segundo período de siembra y los bancos se rehusaron a otorgar los préstamos. Pedro Vallejo, quien vio frustradas todas sus esperanzas, recordó al referirse a las últimas dos semanas en que se podía sembrar, que "esos quince días nos pasó y el tiempo se va pasando y ya no se puede sembrar aún si le dan la plata porque se acabó el tiempo."

Al final de esta segunda temporada de siembra frustrada, cuando los que cultivaban maíz y frijoles lo hicieron casi exclusivamente "a pulso", el gobierno comenzó a pagar las indemnizaciones por las pérdidas del año anterior. Pero si bien el dinero les llegó demasiado tarde para usarlo para comprar semilla o abono o para contratar peones, los campesinos se extrañaron aún más por la forma en que se distribuyó. Los funcionarios del MAG habían inspeccionado las parcelas de los que alegaron haber sufrido pérdidas por la sequía y resolvieron sobre quiénes y por cuántas hectáreas de cultivos dañados serían indemnizados. Pero cuando emitieron los cheques, de los 4.200 colones (aproximadamente US\$60) que se suponía se pagarían por cada hectárea de maíz o frijoles perdidas, sólo llegó la mitad en algunos casos, el doble en otros o no llegó nada.⁴⁸ En todas las comunidades donde el gobierno pagó "pérdidas", se decía que personas con vínculos políticos recibieron cheques, aunque no habían sembrado nada. Por otro lado, con pocas excepciones,

los reclamantes que tuvieron una participación más activa en la "huelga" de junio, no recibieron absolutamente nada.

Seis meses después de la toma del edificio municipal, muchos campesinos consideraban "el pago de las pérdidas" como el mayor logro de su movimiento. Algunos, sin embargo, lo consideraban "una burla", "una cochinateda" o "confites" que no contribuían en nada a resolver sus problemas a largo plazo y que el gobierno se los "tiraba" para "tranquilizarlos". Un residente del pueblo de Florida manifestó que, "al agricultor lo agarraron como un juguete, lo agarraron de maje al trabajador."

La "huelga" de agricultores de junio de 1988 en Santa Cruz fue un movimiento sin precedentes para esta región de Costa Rica, como lo comprendieron tanto los huelguistas como los funcionarios del gobierno. Juvencio Matarrita se rió de esto maravillado y con la satisfacción de presenciar algo que había esperado durante mucho tiempo:

Antes de esta carambada yo en mi vida nunca he visto estas movilizaciones, hasta ahora. Es la primera vez que he visto esta carajada. Y tengo más de ochenta años de vivir. Nunca nos hemos ocupado de estas cuestiones... Ahora es un nuevo mundo.

No obstante, aunque todos eran conscientes de lo que estaba en juego, casi todos coincidieron en que también fue un movimiento sin ganadores ni perdedores. Vinculado como fue a la desesperación y la urgencia por el período de siembra, su fuerza se menguó cuando ya había pasado toda posibilidad y esperanza de sembrar y el gobierno había pagado las indemnizaciones nominales por las pérdidas del año anterior. Así como la toma de la "muni" se les había escapado de las manos a los dirigentes de la protesta, tampoco estaban en capacidad de lograr consolidar una organización fuerte, en parte debido a la falta de recursos necesarios para mantener la comunicación con los demás asociados, por su dispersión geográfica y, en parte debido a que ellos también debían dedicar mucho tiempo y esfuerzo a las actividades básicas de producción y sobrevivencia.

Aún sin otros desastres de orden climático, los cambios impuestos por los recortes crediticios, el estancamiento de los precios de sustentación y los constantes aumentos de los costos de insumos representan un reto mucho más desafiante para los pequeños productores de Santa Cruz, que la

organización de un movimiento de protesta. Después de la "huelga" de junio, el dirigente de ASPPAS, Marcos Ramírez, comentó sobre esta necesidad de hallar nuevas modalidades de producción, ante una reunión de jefes de comités comunales:

La misma unidad, la misma fuerza que nosotros tenemos ahorita, que es una fuerza para presionar, para irnos levantando un movimiento, para hacer un bloqueo de carreteras, para todo éso, es una fuerza que nosotros la podemos unir para producir también. Porque Ud. es agricultor, Ud. es agricultor y Ud. es agricultor. Pero a cada uno le meten su garrotazo porque no se defiende con la fuerza que tiene. Si nosotros este año hubiéramos aplicado esa misma fuerza no para hacer un bloqueo y esas carajadas, si esa misma fuerza la hubiéramos aplicado para la producción, otro gallo nos cantaría.

El Estado había jugado bien sus cartas, reaccionando ante la movilización de los agricultores con una combinación típicamente costarricense de negociaciones prolongadas, concesiones menores, promesas vagas y un uso repentino —aunque por lo general, esporádico y moderado— de la represión.⁴⁹ Sin embargo, actualmente peligra la capacidad estatal de continuar con este modelo "desmovilizador", ya que depende de la asignación de recursos a actividades consideradas como inapropiadas para el país por los organismos financieros internacionales. Se ha erosionado, sin duda, la imagen benevolente del Estado, pero al pagar indemnizaciones —por más inadecuadas que sean— por las pérdidas de cultivos, reafirmó su rol de proveedor, reforzando las expectativas derivadas de vivir durante varias décadas en un Estado benefactor.

Conclusiones

Este ensayo plantea que los antropólogos, con su tradicional interés en el desarrollo del capitalismo agrario y su énfasis en los estudios de campo a nivel de la comunidad, pueden hacer un aporte significativo a la comprensión de las protestas contra la austeridad económica, cada vez más frecuentes en los países en desarrollo. Es necesario combinar diferentes niveles de análisis para comprender esta resistencia, ya que la gente vive los ajustes estructurales económicos de manera históricamente específica, que frecuentemente está fuera del alcance de los científicos sociales que

enfocan los aspectos globales de la crisis de la deuda en el Tercer Mundo. Los cambios económicos vertiginosos —ya sean una inflación galopante, recortes en el crédito o en precios de sustentación o las promesas de ayuda de emergencia incumplidas son vistos a través del lente de las experiencias, identidades y expectativas personales y locales. Como he sugerido arriba, éstos son mucho más complejos que los problemas de distribución que, demasiado a menudo, constituyen el eje de las explicaciones predominantes de las protestas contra la austeridad y de las definiciones antropológicas de la cultura política. Los cambios económicos repentinos pueden agravar el impacto de otros problemas y percances, generar una mayor comprensión de los procesos políticos más generales y provocar un paso de la quietud hacia la movilización. Pero el sentido de violación subyacente a protestas como las efectuadas en Santa Cruz, no existe separado de, ni puede ser comprendido sin hacer referencia a los elementos específicos de esta cultura política, concebida en su forma más amplia, incluyendo la identidad de los actores como agricultores y su historia de organización y participación política.

Las acciones estatales también juegan un papel en la generación de esta nueva comprensión, así como contribuyeron antes a crear expectativas de benevolencia y —inadvertidamente— a la fundación de ASPPAS. Es a través de políticas estatales que se implementan las recomendaciones del FMI, el Banco Mundial y la AID, y tienden a intensificarse los esfuerzos estatales por mediatizar las tensiones, al menos en Costa Rica, cuando surge resistencia desde abajo o de sectores dominantes afectados. Además, el gobierno costarricense ha utilizado la protesta popular como ficha de negociación para "suavizar" las demandas por una acelerada liberalización económica en las negociaciones con los organismos financieros internacionales.⁵⁰ Esto sugiere que influirán en el ritmo del proceso de ajuste, no sólo los grupos subordinados afectados por la austeridad económica, tales como los pequeños propietarios de Santa Cruz, o sectores poderosos afectados, como los grandes ganaderos o arroceros, que históricamente se han beneficiado de las políticas estatales; también la élite acomodada al interior del aún poderoso aparato estatal, pero cautelosa por el costo social que implica la imposición de una liberalización económica irrestricta, puede tomar previsiones sobre la experiencia de estos otros

grupos. Costa Rica, con su historia de concertación social entre grupos dominantes y subordinados, así como su ubicación geográfica estratégica que ha llevado a la indulgencia de parte de los acreedores internacionales,³ se puede considerar, por tanto, como un caso de prueba respecto a las posibilidades de absorber las tensiones provocadas por la austeridad. Esto, así como la diversidad de aquellos que esperan que el Estado siga proporcionando lo que siempre les ha dado, contribuye a que sea éste un proceso prolongado y complejo de "toma y daca" respecto a las demandas surgidas desde abajo.

Notas

1. Roseberry 1988; Smith 1984; Wolf 1982.
2. Los programas de ajuste estructural se encaminan principalmente a extraer recursos para los acreedores y, en forma secundaria, a aliviar los síntomas de la crisis económica (que a menudo más bien se agravan debido al gasto para amortizar la deuda externa en menoscabo del gasto social). Estas políticas, que generalmente son implementadas como parte de los acuerdos crediticios con el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI), en Centroamérica tienden a estar estrechamente vinculadas a los cambios que buscan introducir los organismos internacionales de asistencia, en particular la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). Las condiciones impuestas por estos organismos son muy semejantes (y a menudo vinculadas entre sí), aunque el FMI enfatiza políticas monetarias, fiscales y cambiarias, el Banco Mundial acentúa la promoción de exportaciones y de la inversión, mientras que la AID enfatiza la privatización de las empresas públicas y el desarrollo del sector privado. Típicamente, estas instituciones, aliadas frecuentemente con sectores de la élite nacional, buscan liberalizar la economía estimulando las exportaciones y la flexibilidad cambiaria, levantando las barreras proteccionistas y eliminando los subsidios —directos e indirectos— a las importaciones, los precios de sustentación para productores, los precios para el consumidor y a los créditos de operación e inversión. Balancear el presupuesto nacional y reducir el gasto público, también figuran entre los objetivos principales de la mayoría de los programas de ajuste.
3. Weller and Guggenheim 1982.
4. El ensayo de Murphy (1987) sobre los recientes brotes de violencia en la República Dominicana, que incluye un análisis de la conciencia política de los participantes en estas protestas contra la austeridad, constituye una excepción a esta tendencia.

5. Frieden 1989; Nelson 1989b; Pastor 1987.
6. Mc Coy 1989.
7. Walton 1989:317-318.
8. Sobre la noción de "economía moral", véase Scott (1976); Thompson (1971).
9. Tanto los participantes en la protesta, como los medios de comunicación y los funcionarios del gobierno, se refieren a este movimiento como una "huelga" o, con menos frecuencia, un "paro". He utilizado comillas porque el significado del término como aparece aquí, difiere de las acciones obreras a que generalmente hace referencia.
10. Warman, 1976:13.
11. Ortner 1984:143.
12. Scott 1985; Stern 1987.
13. Walton 1989:315.
14. Mc Coy 1989:217.
15. Por lo general, los politólogos analizan la cultura política desde una perspectiva sincrónica, enfocando las actitudes (por ejemplo, Tiano 1986), en contraste con las interpretaciones diacrónicas más amplias de los historiadores y antropólogos.
16. Forman 1979:41-42.
17. Skocpol, 1985:27.
18. Cf. Shanin 1982.
19. Para una variedad de perspectivas, véase Edelman y Kenan (1989).
20. IDB, 1988.
21. Seligson 1980.
22. La banca costarricense se nacionalizó al finalizar la Guerra Civil de 1948. Esto permitió a los victoriosos social demócratas diversificar la economía basada en la producción de café y banano, mediante la canalización de crédito hacia regiones y sectores productivos previamente poco desarrollados.
23. Palma 1980; Kincaid 1989.
24. Sobre la crisis de la deuda en Costa Rica y el nuevo modelo de crecimiento basado en la exportación, véase Artavia, et al. (1987),

Bulmer-Thomas (1988), Edelman (1983, 1985b), Nelson (1989, 1990), Reuben (1988), Rivera (1983), Rovira (1983, 1987), Seligson y Muller (1987), Torres Rivas, et al. (1987) y Zimbalist (1988). Sobre el resto de Latinoamérica, véase CEPAL (1988) y Stallings y Kaufman (1989).

25. El acuerdo con la AID en 1987, por ejemplo, incluía restricciones explícitas del crédito subsidiado para los sectores agropecuario e industrial y exigió una reducción de empleos en el sector público (IDB 1988:387).
26. La decisión del CNP de dejar de comprar maíz amarillo a productores nacionales, fue una de las causas inmediatas que provocó la mayor combatividad del movimiento campesino en la provincia de Limón a partir de 1986 (CENAP et al. 1988).
27. BCCR 1988.
28. Las sumas en dólares se calculan con base en los tipos de cambio promedios de 10,52 para 1980 y de 50,77 para 1985 (BCCR 1986 21,1-213; y BCCR, S.F.).
29. CENAP et al. 1988; La Nación 1988c.
30. IMN, sf.; Hagenauer, 1980; Fleming, 1986.
31. DEEC, 1987.
32. En comparación con el resto del país, la dieta guanacasteca incluye una mayor variedad de comidas hechas a base de maíz: el pinolillo y el chicheme (bebidas); el atol de maíz y el pozol; el yol tamal (dulce) y otros tipos de tamales; las tortillas y las rosquillas, entre muchos otros. "Maicero", un término peyorativo en la zona cafetalera del Valle Central, es simplemente un término descriptivo en Guanacaste.
33. El único caso, desde 1950, de más de un año consecutivo de sequía, se da de 1975 a 1977 y, aunque los datos para este período son incompletos, es posible que esta sequía haya sido más severa que la de 1985 a 1987.
34. Scott, 1976: 16-18.
35. Rudé, 1980: 28-29.
36. No es de extrañar que las nuevas organizaciones de agricultores en Guanacaste, al igual que en otras partes, rechazan la denominación "sindicato" y prefieren otras menos cargadas de connotaciones, como "unión" o "asociación".
37. Cf. Blanco y Navarro, 1984.
38. CENAP *et al.*, 1988; Reuben, 1988; Rivera y Román, 1988.

39. Véase Edelman (1987) para un estudio de caso sobre cómo ha empleado la Cámara de Ganaderos esta influencia y poder.
40. Con la Ley de Fomento de Desarrollo Agropecuario (FODEA) de 1987, el gobierno se comprometió a emitir bonos que, en efecto, readecuaron las deudas de los productores. Sin embargo, ha sido muy desigual en su aplicación y se convirtió en otro punto de fricción entre las organizaciones de agricultores y el gobierno.
41. Las negociaciones abarcaron una amplia gama de temas: las condiciones y disponibilidad crediticias; asistencia técnica; el presupuesto del IDA; financiamiento permanente para el CNP; y acceso a los acuerdos con los acreedores internacionales que se consideraban perjudiciales para los productores de alimentos básicos para consumo nacional (cf. CENAP et al. 1988:9-15; Rivera y Román 1988). Sobre los acontecimientos en Guanacaste en este período, véase *El Amanezquero* (1988:6-7).
42. Durante un tiempo, Radio Chorotega, la estación de mayor sintonía en las zonas rurales de Santa Cruz, sirvió también como un importante foro de discusión sobre los problemas de los agricultores. A finales de 1988, la Iglesia despidió al personal que había fomentado este rol activista de la emisora.
43. Sobre la UNSA, véase Román et al. 1988. Desde el principio, fueron evidentes las discrepancias entre las diversas facciones de la UNSA. En una ocasión, por ejemplo, se dice que el dirigente de una asociación de pequeños productores de la región Atlántica, quien era también dirigente de la UNSA, amenazó con efectuar una marcha para "tomar" San José, jactancia que provocó una reacción apresurada de representantes de las Cámaras para desmentirlo (*La Nación* 1988b). Eventualmente, las organizaciones de grandes productores, en particular de ganaderos, se dieron cuenta que todavía podían negociar en forma individual con el gobierno y se retiraron de la UNSA.
44. Román *et al.*, 1988.
45. En Guanacaste, los manifestantes bloquearon los puentes sobre las carreteras principales en Santa Cruz, Guardia de Liberia y Cañas. Otros bloqueos se efectuaron en Guácimo, provincia de Limón, y en Parrita, provincia de Puntarenas.
46. Al señalar estas diferencias de interpretación, no trato de implicar que ambas versiones de lo acontecido son igualmente válidas. En términos de su falta de consistencia interna, la corroboración con otras fuentes y su credibilidad, es probable que la versión de Pizarro revele más acerca de su propio carácter que sobre la toma de la "muni".
47. Varias personas nombradas en los citatorios no habían participado en la ocupación del edificio. Algunos habían participado en el bloqueo del puente, pero no habían entrado a la "muni". Otros no tuvieron ninguna participación, como fue el caso de un hombre que

estuvo hospitalizado para cirugía el mismo día que le acusaban de haber estado en la municipalidad.

48. El Fondo de Contingencias y el MAG argumentaban que esta suma por hectárea representaba la mitad de los costos de producción promedios. Los agricultores mantenían que más bien representaba aproximadamente la quinta parte y menos en el caso de los que alquilaban tierras para cultivar.
49. Anteriores protestas campesinas en Guanacaste incluían la ocupación de tierras ociosas en latifundios, el robo de ganado y actos ocasionales de violencia contra terratenientes (cf. Edelman 1985a, Gudmundson 1983, Villarreal 1983). En cambio, la "huelga" de 1988 buscó influir sobre las políticas a nivel nacional y se realizó en coordinación con aliados de la clase dominante y de otras regiones.
50. Reuben, 1988: 92-94; Bulmer Thomas, 1988.
51. Sachs, 1989.

Bibliografía

El Amanezquero

1988 "Por el camino de la unión," *El Amanezquero La Revista de los Guanacastecos* 20 (Julio):6-7.

Artavia, Roberto; Forrest D. Colburn; Iván Saballos Patiño
1987 "La experiencia con exportaciones en Costa Rica,"
en *Centroamérica: estrategias de desarrollo*, Forrest D.
Colburn ed., pp. 107-129. San José: Editorial
Universitaria Centroamericana.

BCCR (Banco Central de Costa Rica)
s.f. *Estadísticas económicas 1977-1984*. San José:
BCCR.

1988 "Panorama crediticio del Sistema Bancario
Nacional al 30 de setiembre de 1985-1986-1987." San
José: BCCR, División Económica, Departamento
Monetario, poligrafiado.

1985 *Estadísticas 1950-1985*. San José: BCCR.

Blanco, Gustavo y Orlando Navarro
1984 *El movimiento solidarista costarricense*. San José:
Editorial Costa Rica.

Bulmer Thomas, Victor

1988 "The New Model of Development in Costa Rica," en *Central America: Crisis and Possibilities*, Rigoberto García ed., pp. 177-196. Suecia: Estocolmo: Institute of Latin American Studies.

CENAP (Centro Nacional de Acción Pastoral); Centro de Estudios Para la Acción Social; Justicia y Paz; Escuela de Economía, Universidad Nacional

1988 *No hay paz sin alimentos: lucha campesina en Costa Rica*. San José: CENAP, CEPAS, Justicia y Paz, ESEUNA.

CEPAL (Comisión Económica Para América Latina)

1988 *La evolución del problema de la deuda externa a en América Latina y el Caribe*. Santiago: Naciones Unidas, Estudios e Informes de la CEPAL no. 72.

DGEC (Dirección General de Estadística y Censos)

1987 *Censo de población 1984 tomo 1*. San José: DGEC.

Edelman, Marc

1987 "El distrito de riego de Guanacaste (Costa Rica) y la política del agua," *Anuario de Estudios Centroamericanos* 13(1): 95-111.

1985b "Back from the Brink: How Washington Bailed Out Costa Rica," *Report on the Americas* 19(6): 37-48.

1985a Land and Labor in an Expanding Economy: The Hacienda System in Guanacaste Province, Costa Rica, 1880-1982. Tesis de Doctorado, Columbia University.

1983 "Recent Literature on Costa Rica's Economic Crisis," *Latin American Research Review* 18(2): 166-180.

Edelman, Marc y Joanne Kenen, eds.

1989 *The Costa Rica Reader*. New York: Grove Weidenfeld.

Fleming, Theodore H.

1986 "Secular Changes in Costa Rican Rainfall: Correlation with Elevation," *Journal of Tropical Ecology* 2:87-91.

Forman, Shepard

1979 "The Significance of Participation: Peasants in the Politics of Brazil," in *Political Participation in Latin America, Volume II Politics and the Poor*, Mitchell A. Seligson y John A. Booth eds., pp. 36-50. Nueva York: Holmes & Meier.

Frieden, Jeffrey A.

1989 "Winners and Losers in the Latin American Debt Crisis: The Political Implications," en *Debt and Democracy in Latin America*, Barbara Stallings y Robert Kaufman eds., pp. 23-35. Boulder, Colorado: Westview.

Gudmundson, Lowell

1983 *Hacendados, políticos y precaristas: La ganadería y el latifundismo guanacasteco, 1800-1950*. San José: Editorial Costa Rica.

Hagenauer, Werner

1980 "Análisis agro-metereológico en la zona de Cañas y Bagaces (Guanacaste) en los años 1921 a 1979," *Informe Semestral* [Instituto Geográfico Nacional], Julio-Diciembre: 45-59.

IDB (Inter-American Development Bank--Banco Interamericano de Desarrollo)

1988 *Economic and Social Progress in Latin America 1988 Report*. Washington: IDB.

IMN (Instituto Meteorológico Nacional)

s.f. "Totales mensuales de precipitación." San José, Costa Rica, informes inéditos.

Kincaid, A. Douglas

1989 "Costa Rican Peasants and the Politics of Quiescence," en *The Costa Rica Reader*, Marc Edelman y Joanne Kenen, eds. pp.178-186. Nueva York: Grove Weidenfeld.

McCoy, Jennifer L.

1989 "Venezuela: Austerity and the Working Class in a Democratic Regime," en *Paying the Costs of Austerity in Latin America*, Howard Handelman and Werner Baer eds., pp. 195-223. Boulder, Colorado: Westview.

Murphy, Martin F.

1987 "The International Monetary Fund and Contemporary Crisis in the Dominican Republic," en *Crises in the Caribbean Basin*, Richard Tardanico ed., pp. 241-259. Beverly Hills, California: Sage Publications, Political Economy of the World-System Annuals Volumen 9.

La Nación (San José)

1988a "Tomada Municipalidad de Santa Cruz," *La Nación*, Junio 11:8A.

1988b "UNSA amenaza tomar San José," *La Nación*, Julio 27:6A.

1988c "Gastos del Gobierno Central," *La Nación*, Setiembre 20:5A.

Nelson, Joan M.

1989 "Crisis Management, Economic Reform and Costa Rican Democracy," en *Debt and Democracy in Latin America*, Barbara Stallings y Robert Kaufman eds., pp. 143-161. Boulder, Colorado: Westview. Pp.143-61.

1990 "The Politics of Adjustment in Small Democracies: Costa Rica, the Dominican Republic, Jamaica," en *Economic Crisis and Policy Choice*, Joan Nelson ed., pp.159-214. Princeton: Princeton University Press.

Ortner, Sherry B.

1984 "Theory in Anthropology since the Sixties," *Comparative Studies in Society and History* 26(1): 126-166.

Palma, Diego

1980 "El Estado y la desmovilización social en Costa Rica," *Estudios Sociales Centroamericanos* 27:183-206.

Pastor, Manuel

1986 *The International Monetary Fund and Latin America: Economic Stabilization and Class Conflict*. Boulder, Colorado: Westview.

Primer Encuentro Campesino

1987 "Primer Encuentro Campesino Guanacaste oct. 87," poligrafiado.

Reuben Soto, Sergio

1988 *Ajuste estructural en Costa Rica: Estudio socio-económico de una década*. San José: Editorial Porvenir.

Rivera, Rolando e Isabel Román

1988 "La protesta campesina en la Costa Rica de los ochenta: características, significado social y perspectivas futuras," Ponencia presentada en el VII Congreso Centroamericano de Sociología, Guatemala, Octubre 10-15.

Rivera Urrutia, Eugenio

1982 *El Fondo Monetario Internacional y Costa Rica, 1976-1982*. San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones.

Román, Isabel; Sandra Cartín; y Rolando Rivera

1988 *UNSA: por el derecho a producir*. San José: Centro de Estudios Para la Acción Social, Cuaderno de Estudio No. 8.

Roseberry, William

1988 "Political Economy," *Annual Review of Anthropology* 17: 161-185.

Rovira Mas, Jorge

1987 *Costa Rica en los años 80*. San José: Editorial Porvenir.

1983 (ed.) *Costa Rica hoy: la crisis y sus perspectivas*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.

- Rudé, George
1980 *Ideology and Popular Protest*. Nueva York: Pantheon.
- Sachs, Jeffrey
1989 "Making the Brady Plan Work," *Foreign Affairs* 68(3):87-104.
- Scott, James C.
1985 *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press.

1976 *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Seligson, Mitchell A.
1980 *Peasants of Costa Rica and the Development of Agrarian Capitalism*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Seligson, Mitchell A. y Edward N. Muller
1987 "Democratic Stability and Economic Crisis: Costa Rica, 1978-1983," *International Studies Quarterly* 31: 1-26.
- Shanin, Teodor
1982 "Defining Peasants: Conceptualisations and De-conceptualisations: Old and New in a Marxist Debate," *Sociological Review* 30(3): 407-432.
- Skocpol, Theda
1985 "Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research," en *Bringing the State Back In*, Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer y Theda Skocpol eds., pp. 3-37. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, Carol A.
1984 "Local History in Global Context: Social and Economic Transitions in Western Guatemala," *Comparative Studies in Society and History* 26(1): 193-228.

Stallings, Barbara y Robert Kaufman eds.
1989 *Debt and Democracy in Latin America*. Boulder, Colorado: Westview Press.

Stern, Steve J.
1987 "New Approaches to the Study of Peasant Rebellion and Consciousness: Implications of the Andean Experience," en *Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World, 18th to 20th Centuries*, Steve J. Stern ed., pp. 3-25. Madison: University of Wisconsin Press.

Thompson, E.P.
1971 "The Moral Economy of the English Crowd of the Eighteenth Century," *Past and Present* 50:76-136.

Tiano, Susan
1986 "Authoritarianism and Political Culture in Argentina and Chile in the mid-1960s," *Latin American Research Review* 21(1): 73-98.

Torres-Rivas, Edelberto et al.
1987 *Costa Rica: crisis y desafíos*. San José: Departamento Ecuménico de Investigaciones.

Villarreal, Beatriz
1983 *El precarismo rural en Costa Rica, 1960-1980*. San José: Editorial Papiro.

Walton, John
1989 "Debt, Protest, and the State in Latin America," en *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*, Susan Eckstein ed., pp. 299-328. Berkeley: University of California Press.

Warman, Arturo
1976 *...Y venimos a contradecir. Los campesinos de Morelos y el Estado nacional*. México: Ediciones de la Casa Chata.

Weller, Robert P. and Scott E. Guggenheim eds.
1982 *Power and Protest in the Countryside: Studies of Rural Unrest in Asia, Europe, and Latin America*. Durham: Duke Press Policy Studies.

Wolf, Eric R.

1982 *Europe and the People without History*. Berkeley: University of California Press.

Zimbalist, Andrew

1988 "Costa Rica," en *Struggle Against Dependence: Nontraditional Export Growth in Central America and the Caribbean*, Eva Paus ed., pp. 21-40. Boulder, Colorado: Westview.